

**TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**  
**SALA LABORAL**

Medellín, diecinueve (19) de febrero de dos mil veinticuatro (2024).

De conformidad con el artículo 316 del Código General del Proceso, aplicable en materia laboral y seguridad social, en virtud del art. 145 del estatuto procesal laboral, se corre traslado a la parte demandante, por el término de tres (3) días, para lo preceptuado en dicha normatividad, esto es, pronunciarse si a bien lo tienen, de la solicitud de desistimiento al recurso de apelación presentado por la apoderada judicial de la parte demandada UGPP, a través del correo institucional: [des00sltsmed@cendoj.ramajudicial.gov.co](mailto:des00sltsmed@cendoj.ramajudicial.gov.co)

**NOTIFÍQUESE**

  
**MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO**  
**Magistrada**

**EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR  
DE MEDELLÍN – SALA LABORAL - HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por  
Estados N° 029 del 20 de febrero de 2024.

**Consultable aquí:**

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/161>

Honorable Magistrado  
**Tribunal Superior de Medellín-Sala Laboral**  
E. S. D.

**Tipo de proceso:** Ordinario Laboral  
**Proceso Rad. No.:** 05001310500920210044701  
**Demandante:** CARLOS ARTURO RESTREPO SIERRA  
**Demandados:** UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL- UGPP

**NORELA BELLA DIAZ AGUDELO**, identificada con la cedula de ciudadanía No. 43.419.318, mayor de edad, vecina de esta ciudad, actuando en mi condición de apoderada general de acuerdo a la escritura pública No. 3457 de 2013, suscrita en la Notaria Veinte del Círculo de Bogotá D.C., de la **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL- UGPP**, entidad pública del orden nacional, con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., que obra en calidad de demandada, de conformidad con el artículo 316 del Código General del Proceso, presento desistimiento del recurso de apelación presentado ante el juzgado noveno laboral de Medellín, de conformidad con los siguientes argumentos.

El artículo 316 del Código General del proceso, aplicable por remisión expresa del artículo 145 del CPL señala:

“ARTÍCULO 316. DESISTIMIENTO DE CIERTOS ACTOS PROCESALES. Las partes podrán desistir de los recursos interpuestos y de los incidentes, las excepciones y los demás actos procesales que hayan promovido. No podrán desistir de las pruebas practicadas.

(...)

No obstante, el juez podrá abstenerse de condenar en costas y perjuicios en los siguientes casos:

1. Cuando las partes así lo convengan.
2. Cuando se trate del desistimiento de un recurso ante el juez que lo haya concedido. (...)”

En vista de lo anterior, esta defensa en ejercicio de esta facultad y aplicando los criterios interpretativos que han prevalecido al interior de la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Laboral y de la Corte Constitucional, en especial las sentencias SL3343-2020, SL3635-2020 y SU347/22, dónde se ha establecido un precedente jurisprudencial y constitucional sólido a través del tiempo y pacífico, respecto a la vigencia de la convención colectiva del ISS (2001-2004) y a la forma de interpretar los efectos prolongados de la misma, respecto a temas pensionales hasta el 31 de diciembre de 2017 considera que el recurso interpuesto no tiene vocación de modificar dicho precedente, pues si bien la UGPP considera que tiene un punto de debate interpretativo en la materia, también considera que debe acatarse y respetarse las decisiones judiciales y por tanto modificar el criterio interno para este tipo de casos.

En cumplimiento de la anterior la UGPP modificó su lineamiento institucional con el fin de acatar lo dispuesto en la Sentencia SU-227/21 que disponen la obligatoriedad del acatamiento del precedente judicial "Sobre este particular, la Corte Constitucional ha señalado que el defecto por desconocimiento del precedente se configura cuando, sin justificación alguna, un funcionario judicial se aparta de una regla de decisión contenida en una o más sentencias anteriores a un caso determinado que, por su pertinencia y semejanza con los problemas jurídicos resueltos, en particular en sus supuestos fácticos y jurídicos, debe aplicarse por las autoridades judiciales al momento de proferir un fallo. El defecto resulta predicable frente a decisiones expedidas por el Tribunal de mayor jerarquía en la respectiva jurisdicción y, en todo caso, por la Corte Constitucional", en el mismo sentido la Sentencia C-539 de 2011, "En esta oportunidad, la Corte reitera nuevamente el mandato superior de sujeción de las autoridades administrativas a la Constitución y a la ley, y por ende al precedente judicial de las Altas Cortes, en desarrollo del Estado Social y Constitucional de Derecho –art.1

CP-; los fines esenciales del Estado-art.2-; la jerarquía superior de la Constitución -art.4-; la sujeción de las autoridades públicas a la Constitución -artículos 6o, 121 y 123 CP-; el debido proceso y principio de legalidad -art.29 CP-; el derecho a la igualdad -art.13 CP-; la buena fe de o las autoridades públicas -art.83 CP-; los principios de la función administrativa -art. 209 CP-; la fuerza vinculante del precedente judicial -artículo 230 superior-; y la fuerza vinculante de las decisiones de constitucionalidad -artículo 241 de la Carta Política-”.

En consecuencia, la modificación del lineamiento institucional obedece al principio de celeridad y economía procesal que atiende a una nueva línea de defensa de la entidad, que busca encontrar un equilibrio entre la preservación y el buen manejo de los recursos, en concordancia con el principio de sostenibilidad presupuestal y los principios que recubren la actuación judicial, evitando un desgaste innecesario del aparato judicial, atendiendo a que dicha actuación deriva directamente del cumplimiento del precedente jurisprudencial antes mencionado.

Vale la pena aclarar que en el presente caso es aplicable el precedente jurisprudencial antes citado en la medida que se cumplen los siguientes requisitos, conforme al artículo 98 de la convención colectiva 2001 - 2004:

Fecha en que cumplió 55 años (H) – 50 años (M)	26 de mayo de 2010
Fecha en que cumplió 20 años de servicio	31 de octubre de 2004
Tipo de vinculación	Empleado publico
Fecha de retiro	31 de octubre de 2006

Como se observa en precedencia, el demandante cumplió el requisito de tiempo de servicios antes del 31 de julio de 2010, y la edad de pensión antes del 31 de diciembre de 2017, por tanto, el caso bajo estudio se enmarca en los presupuestos del precedente judicial, lo que indica que, en aplicación del principio de economía procesal este proceso debe culminar ya que el despacho en primera instancia determinó:

Fecha de estatus pensional	31 de octubre de 2006
Tasa de remplazo aplicada	100%
Años de promedio aplicada	2 años de servicio

Lo anterior es compatible con el artículo 98 de la convención colectiva 2001-2004 del ISS que estableció los siguientes requisitos y especificaciones pensionales según la fecha de consolidación de estatus:

Fecha de estatus	Tasa de reemplazo y promedio aplicado
A) Jubilados entre el 01/01/2002 y el 31/12/2006	100% promedio mensual recibido últimos 2 años de servicio
B) Jubilados entre el 01/01/2007 y el 31/12/2016	100% promedio mensual recibido últimos 3 años de servicio
C) Jubilados entre el 01/01/2017 y el 31/12/17	100% promedio mensual recibido últimos 4 años de servicio

Por lo hasta aquí expuesto, es dable desistir del recurso de apelación en tanto el fallo de primera instancia es respetuoso del precedente y aplica en estricto sentido lo dispuesto en la convención colectiva, por tanto, la UGPP acata dicho fallo al no encontrarse ninguna irregularidad de derecho en el reconocimiento dado en primera instancia.

De otra parte, se solicita que no se de condena en costas en atención a los artículos 365 y 366 del CGP regulan específicamente la condena en costas y el numeral 8 del 365 dispone que:

*“Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación.”*

Significa que para que proceda la condena en costas es necesario que aparezca probado en el expediente que se causaron y, además, el juez al momento de fijar el monto deberá analizar las circunstancias en cada caso. En ese sentido, la determinación de las costas no es una consecuencia automática del desistimiento, pues, para imponerlas, el Juez debe analizar la conducta asumida por las partes y determinar si estas se probaron y causaron.

Es importante señalar que, en cuanto a costas no se producirá condena a cargo de quienes desisten, en aplicación del artículo 188 del CPACA, así como del numeral 4, artículo 316 del CGP; así lo entendió el Consejo de Estado en sentencia del 17 de octubre de 2013 M.P. Guillermo Vargas Ayala, rad. 15001-23-33-000-2012-00282-01:

*"5.2.4.- No obstante, debe la Sala advertir que así como en vigencia del C.C.A. ésta Corporación venía sosteniendo que la decisión de condenar en costas no era una consecuencia automática del desistimiento, esa misma valoración debe hacerse cuando se trate de decretarlo con base en las normas del C.P.A.C.A., ya no acudiendo a la interpretación armónica de los artículos 171 del C.C.A. y del numeral 9 del artículo 392 del C. de P.C., pues es claro que tales disposiciones se refieren a la condena en costas declarada en la sentencia, hipótesis que no se compagina en manera alguna con la figura del desistimiento. El criterio de aplicación de las normas sobre condena en costas en desistimiento de la demanda, debe atender al carácter del conflicto suscitado en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, pues tal y como lo planteó el recurrente, la filosofía de esta figura en el derecho civil es diferente a la ventilada en asuntos como el de la referencia por el carácter público de una de las partes en conflicto, que entre otras cosas, ha justificado en Colombia la existencia de una jurisdicción especializada e independiente de la ordinaria. En ese orden, como las costas procesales se orientan a sancionar el ejercicio abusivo de los instrumentos judiciales o el desgaste procesal innecesario de la parte demandada y de la propia administración de justicia, su reconocimiento debe atender tal naturaleza y las circunstancias de cada caso".*

De igual forma el H. Consejo de Estado, mediante sentencia del 7 de abril de 2016 CP William Hernández Gómez Rad: 130012333000-2013-00022-01 establecido:

*“...El análisis anterior permite las siguientes conclusiones básicas sobre las costas:  
El legislador introdujo un cambio sustancial respecto de la condena en costas al pasar de un criterio “subjetivo” a uno “objetivo valorativo”  
Se concluye que es “objetivo” porque en toda sentencia se “dispondrá” sobre costas, es decir, se decidirá, bien sea para condenar total o parcialmente, o bien para abstenerse, según las precisas reglas del CGP.  
Sin embargo, se le califica de “valorativo” porque se requiere que en el expediente el juez revise si la misma se causaron en la medida de su comprobación. Tal y como lo ordena el C.G., esto es, con el pago de gastos ordinarios del proceso y con actividad del abogado efectivamente realizada dentro del proceso. Se recalca, en esa valoración no se incluye la mala fe o temeridad de las partes. (...)”*

El anterior criterio objetivo-valorativo, fue reiterado por la Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia de 18 de enero de 2018.

*“En el caso en estudio, encontró el Tribunal que la juez de primera instancia se abstuvo de condenar en costas y agencias en derecho a la parte demandada acudiendo para ello a lo señalado a las reglas fijadas en el numeral 8º del artículo 365 del Código General del Proceso, porque consideró que no aparecía probada su causación”.*

Al respecto indicó la segunda instancia que en este caso se estaba ante el evento descrito en el numeral 5 del artículo 365 del CGP, por cuanto prosperaban parcialmente las pretensiones de la demanda. Sin embargo, como lo ha precisado el Consejo de Estado, estas circunstancias deben analizarse en conjunto con la regla del numeral 8, que dispone que "Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación".



De conformidad con lo anterior se solicita se concedan las siguientes:

**PETICIONES:**

**PRIMERO:** Se acepte el desistimiento al recurso de apelación interpuesto por esta defensa judicial el día 10 de agosto de 2023.

**SEGUNDO:** No se condene en costas por este desistimiento de conformidad con el artículo 316 del CGP.

**TERCERO:** Se dé por terminado el presente proceso.

  
**NORELA BELLA DIAZ AGUDELO**  
T.P: 60715 del C.S. de la J.  
C.C.43.419.318